



Asamblea General

Distr. general
8 de diciembre de 2023
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

54º período de sesiones

11 de septiembre a 6 de octubre de 2023

Temas 2 y 4 de la agenda

Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General

Situaciones de derechos humanos que requieren
la atención del Consejo

Situación de los derechos humanos en Myanmar

Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*

Resumen

En este informe, presentado de conformidad con la resolución 49/23 del Consejo de Derechos Humanos, se exponen las tendencias y patrones de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Myanmar entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de julio de 2023. En el informe se documentan los incidentes que afectaron a la población civil, y se presta especial atención a los ataques aéreos militares, las operaciones terrestres y los incendios provocados; se abarcan los actos de violencia cometidos por grupos armados antimilitares; se abordan las preocupaciones en materia de derechos humanos de la comunidad rohinyá; y se formulan recomendaciones dirigidas al ejército, al Gobierno de Unidad Nacional y a la comunidad internacional.

* Este informe se presentó fuera de plazo para incluir en él la información más reciente.



I. Introducción y metodología

1. En su resolución 49/23, el Consejo de Derechos Humanos solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que supervisara y evaluara la situación general de los derechos humanos en Myanmar, prestando especial atención a la rendición de cuentas en relación con las presuntas vulneraciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y que formulara recomendaciones sobre las medidas adicionales necesarias para hacer frente a la crisis en curso. El Consejo también solicitó a la Alta Comisionada que le presentara un informe completo en su 54º período de sesiones.

2. El presente informe contiene las conclusiones de las actividades de seguimiento y verificación realizadas a distancia por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de julio de 2023. Contiene un examen de las tendencias y patrones de las violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y, en su caso, del derecho internacional humanitario, y examina en qué casos algunas de esas violaciones pueden constituir crímenes según el derecho internacional. Entre esas violaciones destacan la matanza de civiles, los desplazamientos forzados, la denegación de ayuda humanitaria y la discriminación extrema y sistemática de los rohinyás por parte del ejército de Myanmar.

3. El informe se basa en 161 entrevistas realizadas durante el período que abarca el informe con fuentes primarias y secundarias, incluidas víctimas y testigos, y en consultas y colaboraciones regulares con organizaciones locales e internacionales, entidades de las Naciones Unidas, expertos temáticos y otros actores. El análisis de otras fuentes primarias, como imágenes por satélite y documentos oficiales, y el seguimiento sistemático de los medios de comunicación y de las redes sociales contribuyeron a las conclusiones presentadas en el informe. El ACNUDH envió cuestionarios a las autoridades militares¹, al Gobierno de Unidad Nacional² y a las principales organizaciones étnicas armadas. Dadas las graves preocupaciones en materia de protección de las personas que informan sobre las violaciones que se producen en Myanmar, en la elaboración del informe se dio prioridad al pleno respeto del principio de “no causar daño” sobre cualquier otra consideración. Se realizaron determinaciones fácticas de incidentes y patrones cuando había motivos razonables para creer que se habían producido incidentes relevantes. Las cifras sobre el número de muertes representan probablemente una subestimación de la realidad sobre el terreno. A efectos del informe, se consideran como matanzas aquellos presuntos incidentes en los que murieron al menos diez civiles o personas fuera de combate.

4. En el informe se hace especial hincapié en las principales preocupaciones en materia de derechos humanos y protección derivadas del recurso sistemático a ataques indiscriminados y ataques dirigidos contra la población civil, incluidos los ataques aéreos, las matanzas y el incendio de aldeas. También se demuestra que la intensidad y la brutalidad de las acciones militares contra la población civil han aumentado con el tiempo, con total impunidad. Las acciones militares han provocado asimismo crisis humanitarias, políticas y económicas interconectadas, con graves consecuencias para la población de Myanmar. Además, el informe contiene conclusiones sobre la situación de los derechos humanos de la comunidad rohinyá, reiterando la falta de avances en las causas profundas de la discriminación sistémica, como la rendición de cuentas, la seguridad, la ciudadanía y las libertades fundamentales.

5. Una espiral aparentemente interminable de violencia militar ha perturbado todos los aspectos de la vida en Myanmar. Desde el golpe de Estado, el ACNUDH ha investigado e informado constantemente sobre la evolución de la crisis de los derechos humanos en Myanmar y el absoluto desprecio de los militares por el derecho internacional y la protección de los civiles. Al analizar el uso de la violencia por parte de los militares contra las personas que se oponen a su poder y contra la población civil en general, han surgido patrones claros que demuestran una escalada continua en cuanto al número, el tipo, la intensidad y la

¹ El ejército está dirigido por el General en Jefe Min Aung Hlaing.

² El Presidente del Gobierno de Unidad Nacional es Win Myint y la Consejera de Estado es Aung San Suu Kyi. Véase [A/HRC/48/67](#), párr. 72.

brutalidad de los ataques. Poco después del golpe, los militares modificaron e instrumentalizaron unilateralmente el marco legal para sofocar la libertad de expresión, justificar la privación arbitraria de libertad y negar a miles de activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos el derecho a las debidas garantías procesales y a un juicio imparcial. Estas tácticas evolucionaron rápidamente hacia los asesinatos selectivos sistemáticos y las detenciones masivas, que incluían torturas y malos tratos, con el resultado de numerosas muertes bajo custodia.

6. El ejército ha recurrido cada vez más a campañas brutales contra sus supuestos oponentes, utilizando cada vez más los ataques aéreos y de artillería contra aldeas y otras zonas pobladas, la quema de pueblos, las ejecuciones y los asesinatos, la tortura, las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los desplazamientos forzados, la denegación de acceso a la ayuda humanitaria y la persecución. Dependiendo de las circunstancias, algunos de estos actos pueden constituir crímenes de lesa humanidad y/o crímenes de guerra³.

7. Con un aumento de la dependencia del ejército de los aviones de combate y los helicópteros artillados como telón de fondo, la violencia ha seguido aumentando, como quedó patente en los múltiples ataques aéreos contra la aldea de Pa Zi Gyi, en la región de Sagaing, en abril de 2023, que provocaron el incidente con más víctimas registrado desde febrero de 2021 (véanse párrs. 12 a 20). El uso cada vez mayor de la fuerza aérea y las municiones por parte del ejército reveló su creciente dependencia de armas pesadas y material que solo puede adquirirse en el extranjero⁴. Además, para adquirir dicho material militar, servicios de apoyo y combustible de aviación, el ejército depende del acceso a divisas extranjeras. Hasta ahora, las medidas selectivas han tenido un éxito limitado a la hora de reducir la capacidad ofensiva del ejército, lo que sugiere que se necesitan urgentemente sanciones internacionales de este tipo más globales, concretas y significativas para reducir la capacidad del ejército de continuar con su campaña de violencia y represión.

8. También suscitan preocupación las violaciones y abusos cometidos por grupos y elementos armados antimilitares. Aunque no son comparables en escala, proporción o alcance a la violencia ejercida por los militares, estos abusos exacerban los problemas de protección de la población civil. Esta situación requiere una acción decisiva por parte del Gobierno de Unidad Nacional y de los grupos armados pertinentes para garantizar la rendición de cuentas y evitar la impunidad en relación con los abusos contra los derechos humanos cometidos por las respectivas fuerzas bajo su control.

II. Violaciones de los derechos humanos por los militares

9. Fuentes fidedignas han verificado que, a 31 de julio, al menos 3.857 personas civiles, no combatientes o fuera de combate, entre ellas 610 mujeres y 431 niños, habían muerto a manos de los militares. Además, 24.123 personas han sido detenidas por su oposición a los militares, de las cuales 19.733 permanecen detenidas⁵. Eludiendo el estado de derecho civil, los militares siguieron prorrogando el estado de excepción: 47 municipios permanecieron bajo la ley marcial, exponiendo a los opositores a los militares a penas más severas, incluida la pena de muerte. Bajo el pretexto de la lucha antiterrorista, los tribunales controlados por los militares impusieron condenas de decenios de duración por una serie de actividades benéficas, como la apertura de escuelas. Un total de 158 personas fueron condenadas a muerte por tribunales controlados por los militares y 4 fueron ejecutadas. Los presos políticos continuaron detenidos en condiciones deplorables y se recibieron periódicamente informes de torturas, violencia sexual y muertes en las cárceles o durante los traslados de presos. En julio de 2023, en una medida con escaso efecto en la práctica, los militares redujeron algo las largas condenas dictadas por dichos tribunales contra el Presidente, Win Myint, y la Consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, del Gobierno de Unidad Nacional.

³ Véanse, entre otros, [A/HRC/48/67](#), [A/HRC/49/72](#), [A/HRC/51/41](#), [A/HRC/52/21](#) y [A/HRC/53/52](#).

⁴ Véase <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2023/05/un-expert-exposes-1-billion-death-trade-myanmar-military>.

⁵ Véase <https://aappb.org/?p=25720>.

10. Como consecuencia de la violencia posterior al golpe de Estado, se estima que cerca de 1,6 millones de personas están desplazadas internamente, y que las poblaciones de las regiones de Sagaing y Magway superan el millón⁶. La población sufre también una precaria situación económica, en la que el producto interno bruto per cápita está cayendo por debajo de los niveles anteriores a la pandemia y la inflación alcanza el 20 %⁷. Por ello, se estima que 15,2 millones de personas padecen una inseguridad alimentaria moderada o grave y casi el doble de hogares expresan su preocupación por la insuficiencia de los suministros alimentarios en comparación con hace un año⁸.

A. Ataques aéreos

11. El uso militar de ataques aéreos aumentó considerablemente durante el período objeto de informe. El análisis de fuentes de acceso público sugiere que se produjeron 687 ataques durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2022 y el 31 de julio de 2023, frente a los 301 comunicados entre febrero de 2021 y marzo de 2022. Fuentes creíbles verificaron que los ataques aéreos militares habían matado a un mínimo de 281 personas, infundiéndole terror en la población civil, que ahora teme razonablemente que puedan bombardearla en sus casas, en escuelas, hospitales y edificios religiosos y en reuniones públicas. Mientras que el noreste y el sureste, especialmente en los estados de Kachín, Kayah y Kayin, eran anteriormente las zonas más atacadas, el informe señala un aumento del 324 % de los ataques aéreos en las regiones centrales, con cifras que pasaron de 78 a 331. Tan solo en la región de Sagaing se produjeron 258 de los 331 ataques aéreos y el 39 % del número total de ataques en todo el país. Preocupa aún más el hecho de que los ataques aéreos se hayan combinado repetidamente con medidas que niegan sistemáticamente a los heridos la posibilidad de acceder a la atención médica.

1. Pa Zi Gyi

12. El 11 de abril de 2023, en la aldea de Pa Zi Gyi, municipio de Kanbalu, región de Sagaing, aviones militares atacaron repetidamente una gran concentración predominantemente civil, lo que provocó el mayor número de muertos en un solo incidente desde el golpe de Estado. Fuentes fidedignas verificaron la muerte de 150 civiles, entre ellos 19 mujeres, 21 niñas y 14 niños. Además, 18 personas afiliadas a grupos armados locales contrarios al ejército murieron en los ataques⁹.

13. En su respuesta al ACNUDH, los militares confirmaron haber llevado a cabo el ataque, aunque afirmaron haber utilizado la máxima moderación. Añadieron que “pueden haberse producido muertes colaterales de personas con indumentaria civil que apoyaban a los terroristas. Independientemente de que vayan vestidos con ropa civil, la ley antiterrorista se aplica a todos aquellos que cometan, intenten cometer, instiguen o participen como cómplices en actividades terroristas”. Esto arroja serias dudas sobre el respeto del principio de distinción por parte de los militares, ya que la declaración sugiere un uso erróneo de una vaga norma de derecho penal nacional para determinar quién pierde la protección frente a los ataques en virtud del derecho internacional humanitario. Un portavoz militar afirmó que los terroristas habían colocado un campo de minas alrededor del lugar del ataque, que había explosivos almacenados en el interior del edificio atacado y que la detonación de esos explosivos causó más víctimas mortales.

⁶ Véase <https://data.unhcr.org/en/situations/myanmar>.

⁷ Véase <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-economic-monitor-january-2023-navigating-uncertainty>.

⁸ Véase <https://reliefweb.int/report/myanmar/myanmar-humanitarian-update-no-31-15-july-2023>.

⁹ Véase <https://airtable.com/shrYUzQe1hKXQ68x/tblswChRJGSzJWr7k>.

14. Varios entrevistados de la zona de Pa Zi Gyi declararon que se habían reunido ese día para inaugurar un centro comunitario en las afueras del pueblo¹⁰. Algunos supervivientes y testigos presenciales relataron que se estaban sirviendo refrescos a los asistentes, incluidos ancianos y niños de la vecindad, en la edificación y sus alrededores. Se informó de que, hacia las 7.40 horas, un avión militar de combate Yak-130 bombardeó el lugar con un artefacto de gas explosivo, que mató instantáneamente a la mayoría de los asistentes. Desde el pueblo, la gente corrió al lugar para asistir a los heridos. Los testigos relataron que gritaban los nombres de sus familiares en una escena dantesca. Un entrevistado describió que había cuerpos inertes en la carretera y miembros esparcidos por todas partes. Otro testigo relató que “algunas personas no tenían cabeza ni brazos ni piernas” y que “era imposible caminar sin pisar cadáveres o sangre”. En un vídeo verificado que se realizó justo después del ataque y fue filmado por un cámara que murió tras perder media pierna en el atentado, se observa que, mientras agonizaba, pidió ayuda diciendo: “Vino un caza [...] ¡Espero salir de esta! ¡Dense prisa en rescatar a los que están vivos!”.

15. Poco después del bombardeo, llegó un helicóptero militar Mi-35 y abrió fuego contra las personas que habían caído. Quienes habían acudido a rescatar a los heridos corrieron a refugiarse mientras trataban de llevárselos. Un entrevistado recordó haberse puesto a cubierto en el lecho de un arroyo bajo un pequeño puente junto con otras diez personas pero, después de que el helicóptero disparara contra ellos, algunos salieron corriendo para alejar los impactos de proyectiles del grupo. Los supervivientes contaron que muchas personas murieron a consecuencia de los disparos del helicóptero mientras buscaban a familiares desaparecidos. Uno de ellos dijo: “Ya no oía ningún grito de los supervivientes pidiendo ayuda; todos habían muerto”.

16. La mayoría de los supervivientes huyeron de la zona después de que se fuera el helicóptero, y los heridos graves fueron trasladados en vehículos a motor para recibir tratamiento médico. Una persona que resultó herida rememoró que los socorristas instaban a los heridos a mantenerse conscientes durante todo el trayecto en motocicleta. No todos sobrevivieron al viaje. A algunos, entre ellos un niño y una mujer embarazada, les amputaron miembros y los médicos constataron quemaduras y heridas de bala. También detallaron los importantes traumas psicológicos que presentaban los supervivientes, incluidos niños pequeños.

17. Tras haber pospuesto la recuperación de los cadáveres por temor a nuevos ataques, por la tarde los residentes reanudaron la inspección y recogida de los restos de las víctimas, ayudados por miembros de grupos armados antimilitares. Se utilizaron camillas con armazones de bambú para transportar los restos mortales a un campo cercano al lugar del ataque, donde se apilaron con miras a su incineración masiva. Hacia las 17.30 horas, otro avión de combate sobrevoló la zona al menos tres veces, lanzando varias bombas y realizando disparos. Aunque aparentemente nadie resultó gravemente herido en el ataque, este puso fin a las operaciones de rescate por ese día, ya que la gente temía que las luces necesarias para tal labor pudieran dar lugar a nuevos ataques. También se informó de daños a construcciones y al ganado.

18. Numerosos vídeos y fotografías publicados en las redes sociales muestran casas destruidas, cuerpos carbonizados y partes del cuerpo y órganos cercenados esparcidos por toda la zona. El análisis de las imágenes de satélite y de las fotografías tomadas sobre el terreno confirmó la presencia de dos posibles cráteres y probó el uso de ametralladoras aéreas. No se encontraron pruebas que apoyaran las alegaciones de los militares de que el edificio se utilizaba para almacenar explosivos. Todas las imágenes verificadas de víctimas muestran a niños, mujeres y hombres vestidos de civil. Algunas imágenes muestran cuerpos expuestos a un calor extremo. El análisis de un experto en municiones examinado por el ACNUDH y otros informes disponibles¹¹ confirman el uso probable de un arma explosiva

¹⁰ Mientras que los militares describieron la construcción como un “cuartel general” del Gobierno de Unidad Nacional, este lo definió como una oficina administrativa del pueblo. Múltiples testigos describieron la ceremonia como la inauguración de un centro comunitario para albergar al grupo de seguridad local que realizaba tareas de vigilancia y de arbitraje en disputas en el contexto posterior al golpe de Estado.

¹¹ Véase <https://www.hrw.org/news/2023/05/09/myanmar-enhanced-blast-strike-likely-war-crime>.

termobárica o de gas explosivo en el ataque, que provocó una “onda de presión”, la cual produjo desmembramientos que ocasionaron la muerte de numerosas personas. Sustentan esta hipótesis los tipos de traumatismos y lesiones que presentaban los cadáveres, la naturaleza de los daños en el edificio y el hecho de que algunas personas que se encontraban fuera de la zona primaria de la explosión presentaran quemaduras, mientras que otras sufrían pérdidas de audición y de visión.

19. Las armas explosivas termobáricas o de gas explosivo están diseñadas para estallar en el aire antes del impacto con el fin de maximizar la destrucción y el número de víctimas al aumentar el radio de la onda expansiva y la explosión. Aunque estas armas no están prohibidas *per se* por el derecho internacional, cuando se utilizan en zonas pobladas o en presencia de civiles tienen casi invariablemente efectos indiscriminados y es muy probable que violen el principio de proporcionalidad, consagrado en el derecho internacional. Preocupa además que no se tenga constancia de que el ejército de Myanmar haya utilizado anteriormente armas termobáricas, y que su empleo en este caso pueda presagiar un posible aumento del uso de este tipo de armas en el futuro. También suscita inquietud el origen de dichas armas.

20. A partir de la información recogida sobre el terreno antes del ataque, el tipo de aviones y su dirección de aproximación ofrecen motivos razonables para creer que el Yak-130 despegó de la base militar de Mandalay mientras que el Mi-35 voló desde la base de Monywa. Estas bases dependen de los mandos militares regionales central y noroccidental, respectivamente. El uso de diversos aviones y bases aéreas y la posterior coordinación de las operaciones aéreas y terrestres indican planificación, coordinación y/o conocimientos en los niveles superiores del mando militar. Además, la implicación de los mandos central y noroccidental y de las tropas de tierra (como se describe en el apartado B) indica la participación del más alto nivel de mando en las operaciones militares a través de la Oficina de Operaciones Especiales 1, con sede en la capital, Naypyidó.

2. Nyaung Kone

21. El 27 de junio de 2023, en la aldea de Nyaung Kone, municipio de Pale, región de Sagaing, los militares llevaron a cabo ataques aéreos reiterados siguiendo una pauta similar a la utilizada en la aldea de Pa Zi Gyi, en los que los bombardeos con armas de amplio alcance fueron seguidos de disparos. Según varios testimonios independientes, murieron diez civiles, entre ellos un monje y cuatro miembros de su familia.

22. Los testigos contaron que los niños en edad escolar estaban asistiendo a clases por la tarde en la escuela primaria local, cerca de un monasterio. Un testigo que regresaba de su granja vio el avión y dijo haber oído los gritos de las víctimas. Otro habitante de la aldea estaba bombeando agua cuando oyó un avión de combate sobrevolando la zona. A continuación, se produjeron numerosos ataques contra la aldea. El testigo relató que “daba mucho miedo, [la bomba] era enorme. Estaba solo y pensaba para mis adentros: acaban de disparar a la gente”.

23. Los aldeanos describieron que, en su primera pasada, el caza lanzó tres bombas, que cayeron sobre una de las residencias del monasterio y en las casas vecinas, y el impacto mató a un monje y a cuatro de sus familiares. Minutos después, el mismo caza lanzó otra bomba que, según los testigos, envolvió inmediatamente en llamas las casas cercanas. “Se levantó una enorme llamarada”, dijo un individuo, “fue como echar gasolina al fuego”. Al pasar por tercera vez sobre el pueblo, volando muy bajo, el avión disparó sobre una zona mucho más amplia que la de las explosiones de las bombas, alcanzando campos de cultivo y la escuela primaria.

24. Las personas que llegaron al lugar minutos después del ataque para prestar asistencia relataron una escena de destrucción sangrienta, con varias víctimas que gritaban pidiendo ayuda. Un testigo describió cómo sacaban de las llamas al menos a siete heridos mientras otras personas se apresuraban a trasladar a otros 20, entre ellos tres niños, para que recibieran tratamiento médico. Una adolescente resultó tan gravemente herida que murió mientras los habitantes de la aldea la transportaban para que recibiera atención médica de urgencia; los testigos señalaron que no podían llevarla a las instalaciones controladas por los militares por miedo a ser detenidos y a las represalias.

25. El análisis de las fotografías tomadas tras el ataque parece indicar el uso probable tanto de explosivos de gran potencia como de armas convencionales. Aunque algunos cadáveres presentaban heridas de metralla, al menos tres parecían no haber recibido impactos, aunque estaban carbonizados. Los testigos observaron tres agujeros en el suelo, cuya profundidad llegaba aproximadamente hasta la altura de la cintura y cuyo diámetro era de unos tres metros, lo que apoya los informes sobre el uso de explosivos de gran potencia. Las fotografías, que mostraban cientos de metros cuadrados de estructuras casi completamente calcinadas, refrendaban la hipótesis de armamento generador de un calor extremo, que es coherente con la capacidad técnica de los aviones de combate. Testigos presenciales precisaron que las construcciones ardieron en menos de diez minutos.

26. Nyaung Kone había sido descrita, de manera sistemática, como una aldea pacífica sin presencia de individuos armados. Fuentes creíbles de acceso público indican que no se habían producido incidentes relevantes u operaciones militares ni antes ni después de los ataques, lo que hace inverosímil la justificación militar del ataque.

3. A Nang Pa

27. El 23 de octubre de 2022, el ejército llevó a cabo un ataque aéreo en la aldea de A Nang Pa, municipio de Hpakant, estado de Kachín, dirigido contra una celebración del aniversario de la Organización para la Independencia de Kachín a la que también asistían miembros del Ejército para la Independencia de Kachín. Fuentes fidedignas verificaron un mínimo de 42 bajas, entre ellas 14 civiles, aunque se cree que el número final de muertos fue mucho mayor¹². Las dificultades para documentar estas cifras se derivan de la lejanía de la zona, los prolongados cortes de Internet y las medidas impuestas por los militares para restringir los desplazamientos de los supervivientes e impedir que los heridos accedieran a la atención médica. Las fotos del lugar de los hechos muestran claramente al menos 30 cadáveres.

28. Según los entrevistados, hacia las 20.30 horas, tres cazas militares bombardearon el lugar dos veces, matando a la mayoría de las personas, incluidos miembros del Ejército para la Independencia Kachín y civiles, así como a un conocido artista local y a empresarios que asistían a las celebraciones, e hiriendo a docenas. Un entrevistado destacó que “era un día especial, mucha gente de los pueblos cercanos vino a ayudar”, y la mayoría de ellos tuvieron que cruzar un puesto de control militar por el puente de Ginsi, a unos 6 km de A Nang Pa. Aunque el ACNUDH no pudo confirmar directamente que el Ejército para la Independencia de Kachín hubiera informado a los militares sobre el suceso, parece razonable pensar que los militares tenían conocimiento de la presencia de civiles. A pesar de la petición del ACNUDH, los militares no facilitaron información sobre cómo habían actuado para cumplir los principios de distinción, proporcionalidad, precaución y necesidad militar en relación con este ataque.

29. Tras el bombardeo, la situación era drástica. Un superviviente recordó: “Podía ver el hueso de mi espinilla partido por la mitad; tenía metralla en la pierna”. Lo llevaron al bosque, lo trataron con lo que tenían a mano y lo colocaron bajo un toldo de bambú, donde permaneció tres días. Otro entrevistado declaró que “después de los bombardeos, hubo mucho caos. Había trozos de cuerpos y sangre por todas partes. La gente pedía ayuda a gritos”. Dijo además que “estaba tan oscuro que no podíamos ver nada. No podíamos identificar a la gente y solo intentábamos reunir a todos los heridos en un mismo lugar. También formamos grupos de personas que no podían ser identificadas ya que a algunos cadáveres les faltaba la cabeza”. Mientras tanto, los militares habían levantado barricadas de bambú y alambres de espino en el puesto de control del puente cercano a Ginsi, denegaron sistemáticamente el acceso de los médicos a la zona y trataron de detener a las personas que venían del lugar. Los equipos de rescate tuvieron que utilizar *longyis* (prendas de tela) para transportar a los heridos a través del bosque y tuvieron que navegar por el río para no alertar

¹² Un entrevistado que participó en el entierro de los fallecidos indicó que murieron más de 200 personas. El Gobierno de Unidad Nacional estimó el total en 130. El Ejército para la Independencia de Kachín no respondió a la solicitud de información del ACNUDH y los militares no proporcionaron cifras; se limitaron a afirmar que “las fuerzas de seguridad tomaron las medidas necesarias contra los terroristas armados”.

a los militares. Muchas personas murieron durante el trayecto y algunas fueron enterradas en el lugar donde fallecieron, lo que dificultó la determinación del número total de muertos.

30. En los días siguientes, las tropas militares vigilaron y asaltaron los centros sanitarios locales, lo que agravó el sufrimiento de las víctimas. Los entrevistados informaron de las amenazas de los militares a los trabajadores sanitarios por atender a las víctimas del incidente. Uno de ellos declaró que las familias tenían miedo de acoger incluso a familiares heridos, ante las amenazas de los militares de detener a toda la familia. Las repetidas acciones militares destinadas a impedir el acceso a la ayuda de emergencia y a la atención médica no tienen justificación y probablemente representan tanto graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos como graves violaciones del derecho internacional humanitario.

B. Matanzas durante operaciones terrestres

31. Las operaciones terrestres continuaron representando otra gran amenaza para la población civil, ya que la brutalidad de los militares ha seguido intensificándose, sobre todo en ausencia de rendición de cuentas. En repetidas ocasiones, las fuerzas militares entraron en las aldeas, acorralaron a los residentes y los ejecutaron. Los testigos y las pruebas fotográficas indicaron que los soldados hicieron uso de una espantosa selección de métodos, probablemente equivalentes a un trato inhumano, para infligir un dolor inimaginable a sus víctimas, como quemarlas vivas o desmembrarlas, violarlas, decapitarlas, apuñalarlas, apalearlas y utilizarlas como escudos humanos contra ataques y minas terrestres. Familias enteras, incluidos ancianos y niños pequeños, han sido asesinadas. Aunque los militares han intentado a menudo destruir pruebas quemando los cadáveres de las víctimas, también han exhibido cadáveres decapitados o profanados de otro modo para infundir terror a quienes los descubren. El ACNUDH también observó una tendencia preocupante de los militares a causar un número comparativamente mayor de muertes entre la población civil durante las operaciones militares que en el pasado. En lugar de dos o tres matanzas, como era habitual en los incidentes del primer año tras el golpe, el análisis de la información recibida indica que, desde abril de 2022, se han producido unas 22 matanzas, que han resultado en 565 muertos, según las estimaciones. Se confirmó que la población de las regiones del centro era la que corría mayor riesgo, y que las muertes allí ascendían a cerca del 80 % de las registradas en todo el país.

1. Nyaung Pin Thar

32. Varias fuentes independientes confirmaron que los militares habían entrado en la aldea de Nyaung Pin Thar, municipio de Htantabin, región de Bago, el 9 de mayo de 2023, lo que provocó la huida de muchos residentes. Al día siguiente, tras la llegada de refuerzos, los militares se enfrentaron al Ejército de Liberación Nacional Karén y a un grupo armado antimilitar. Después de que las fuerzas de la oposición se retiraran, un entrevistado declaró haber visto columnas de humo que se elevaban desde el pueblo.

33. El 12 de mayo regresaron los primeros habitantes de la aldea, que describieron el hallazgo de 19 cadáveres divididos en dos montones, uno de hombres y otro de mujeres y niños. Había hedor a carne carbonizada. Otro cadáver, con marcas compatibles con actos de tortura, fue descubierto más tarde y fotografiado cerca del cementerio del pueblo. Las condiciones meteorológicas adversas impidieron a los militares incinerar completamente los cadáveres. Esto permitió a las fuentes documentar las heridas e identificar a las víctimas, entre las que se encontraban tres niños menores de 7 años, un niño de 15 años y dos hombres de más de 70 años. Los entrevistados informaron de que ocho familias enteras se encontraban entre los fallecidos y, en un caso, tres generaciones de una misma familia habían sido asesinadas. Un habitante de la aldea, que perdió a un miembro de su familia, dijo que “algunos de los cuerpos no estaban completamente quemados. Vimos gargantas cortadas y marcas de sangre procedente de los cadáveres. Vimos dos charcos ensangrentados, mucha sangre cerca de los muertos. Antes de morir, podrían haber sido torturados. También vimos algunas partes del cerebro en el suelo, sus cabezas habían sido dañadas antes de ser quemadas”. Otro testigo vio el cadáver de una niña pequeña con la cabeza gravemente herida que aún sujetaba la mano de su madre muerta.

34. Según la información difundida por la Unión Nacional Karén, la operación estaba bajo el mando directo de un coronel del batallón del municipio de Kyaukkyi, y en ella participaron las columnas militares 73, 559 y 590, adscritas al Mando Regional Sur, la columna 84, adscrita al 6º Mando de Operaciones Militares y la columna 15, adscrita a la 99ª División de Infantería Ligera¹³.

2. Tar Taing

35. En los casos en que entre las víctimas de las matanzas perpetradas por los militares ha habido mujeres, las fuentes han planteado repetidamente denuncias de violación y otras formas de violencia sexual antes de la ejecución. El 1 de marzo de 2023, un centenar de soldados entraron en la aldea de Tar Taing, municipio de Sagaing, región de Sagaing, y recluyeron a unos 60 aldeanos en un monasterio a los que presuntamente torturaron. Al marcharse al día siguiente, se llevaron consigo a diez de los hombres detenidos, tres mujeres y un niño. Los aldeanos informaron de que habían encontrado sus cadáveres en el cercano pueblo de Nyaung Yin en la tarde del mismo día.

36. Los entrevistados que vieron los cadáveres informaron de heridas de bala en la cabeza y disparos por la espalda. Las mujeres fueron encontradas con objetos extraños alojados en sus cuerpos, de lo que podía desprenderse que habían sido objeto de violencia sexual, y parecían haber sido apuñaladas o ejecutadas de un solo disparo. Un entrevistado reconoció a dos mujeres e informó de que sus ropas habían sido rasgadas. Otro entrevistado, recordando haber encontrado a una víctima, declaró que: “Lo decapitaron y pusieron su cabeza en un árbol. Son muy brutales”.

37. Todos los entrevistados confirmaron que no había presencia de grupos armados antimilitares. Según esas fuentes, los militares también saquearon viviendas en busca de dinero y oro. Los entrevistados y las fuentes abiertas indicaron que la 99ª División de Infantería Ligera era probablemente la responsable de los asesinatos.

3. Sone Chaung

38. Hacia las 2.00 horas del 21 de julio de 2023, los habitantes de la aldea de Sone Chaung, municipio de Yinmabin, región de Sagaing, se despertaron por el ruido de disparos. Un habitante de la aldea relató: “Cuando oí los disparos, me desperté. Traté de preguntar a mis vecinos y amigos qué había pasado. Otras personas intentaron llamar al dirigente local. Alguien contestó al teléfono diciendo: ‘Han robado en mi casa, por favor vengan a ayudarme’. Intuimos que esa persona no era él. Algunas personas se desplazaron al lugar y fueron detenidas. Otros se dieron cuenta de que era el ejército y me dijeron que corriera. Así que me escondí detrás de cada casa, una por una, para huir”.

39. Una persona que intervino personalmente en la búsqueda de los desaparecidos refirió haber encontrado, en un primer momento, a tres jóvenes de 17 años muertos. Más tarde, se hallaron otros 11 cadáveres con las manos atadas a las afueras del pueblo. Según el testigo, los cadáveres presentaban heridas atroces, entre ellas cuchilladas, puñaladas, quemaduras graves, ojos arrancados y otras formas de desmembramiento, así como signos de que habían muerto apaleados o desangrados tras haberles cortado arterias principales. Al intentar recoger los cadáveres, el equipo de rescate observó que la cabeza de varios fallecidos colgaba de forma antinatural, lo que indicaba que les habían roto el cuello. Las fotos examinadas por el ACNUDH corroboraron estas descripciones. Más tarde, una unidad militar bombardeó la zona donde se habían encontrado los cadáveres, lo que sugiere un intento de disuadir los esfuerzos de socorro o de ocultar pruebas.

40. Los entrevistados no pudieron dar razones que explicaran el ataque y describieron la aldea como pacífica en general porque la base militar de Aung Zayar está a solo una milla de distancia. Dijeron que no había habido enfrentamientos previos porque no había presencia de grupos armados, salvo un grupo local de autodefensa integrado por habitantes de la aldea mal equipados que intentaban proteger a su comunidad.

¹³ Véase [https://knuhq.org/admin/resources/statements/pdf/KNU%20Statement%20on%20SAC%20Burning%20and%20Killing_Massacre_at%20NyaungPinThar_Final_\(20230514\).pdf](https://knuhq.org/admin/resources/statements/pdf/KNU%20Statement%20on%20SAC%20Burning%20and%20Killing_Massacre_at%20NyaungPinThar_Final_(20230514).pdf) (en birmano).

C. Incendio de pueblos y otras infraestructuras civiles

41. La quema de pueblos, que sigue siendo generalizada y sistemática, representa una afrenta más a la protección de los civiles. Representa una táctica clave de la estrategia militar de los “cuatro cortes”, cuyo objetivo es restringir el acceso a alimentos, financiación, inteligencia y efectivos para los grupos armados. El ejército no solo quema viviendas, sino que también ataca almacenes de alimentos, bancos de semillas y ganado para castigar a una población percibida como hostil e impedir que los oponentes tengan acceso a alimentos. Por su diseño, la estrategia de los “cuatro cortes” también priva a la población civil de alimentos y refugio, lo que convierte la quema de aldeas y la consiguiente destrucción de bienes civiles en una causa fundamental de las necesidades humanitarias a las que se enfrenta el país. Estos actos causan daños inmediatos y a largo plazo y obligan a la población civil a vivir en condiciones precarias, expuesta a numerosos peligros naturales y provocados por el hombre, como las minas terrestres, las condiciones climáticas extremas y las mordeduras de serpiente. En un ejemplo típico, un entrevistado, que había perdido todos sus bienes y medios de subsistencia, y que había estado desplazado internamente durante más de un año después de que los militares quemaran su casa, explicó que su familia sobrevivía únicamente gracias a la buena voluntad de otros miembros de la comunidad.

42. Datos de fuentes de acceso público indican que se han quemado casi 75.000 casas y edificios en 106 municipios de 12 estados y regiones desde el golpe¹⁴. Se ha informado de más de 24.000 quemas desde principios de 2023, lo que sugiere que la campaña de los militares va en aumento. Confirmando que las regiones centrales son el principal escenario de estos incidentes, la región de Sagaing contabiliza más de 50.000 quemas y la de Magway casi 10.000. Como ya se ha documentado, los incendios provocan a menudo la muerte, en particular, de personas, entre ellas ancianos y personas con discapacidad, que no pueden huir de los fuegos arrasadores. El análisis de los datos disponibles indica que más del 90 % de las víctimas tenían más de 60 años o eran personas con discapacidad física o psicosocial. Según los militares, entre el 6 de diciembre de 2021 y el 11 de julio de 2023, los grupos terroristas incendiaron un total de 18 pueblos de 9 municipios, a saber, Ayadaw, Pale, Chaung-U, Kanbalu, Taze, Shwebo, Sagaing y Monywa, en la región de Sagaing y un pueblo en el municipio de Pauk, en la región de Magway. Un total de 923 casas, un transformador y un molino de grano habían sido incendiados. Los militares también negaron la responsabilidad de sus tropas en tales actos, alegando que las reglas de combate prohibían saquear y destruir la propiedad de los pueblos y que el *Tatmadaw* (el ejército) ha estado supervisando estrictamente el cumplimiento de esa política.

43. Sin embargo, el ACNUDH recibió informes y documentó en repetidas ocasiones que los militares saqueaban las casas antes de incendiarlas y no evacuaban a la población antes de prenderles fuego, lo que revelaba un desprecio total por la vida humana. Según una fuente, en la mañana del 25 de marzo, unos 80 militares del municipio de Budalin, en la región de Sagaing, asaltaron la aldea de Sone Kone, y quemaron viviendas, ganado, y cosechas de arroz y otros cultivos. Las imágenes por satélite confirman que 175 casas quedaron reducidas a cenizas. Siete ancianos que residían en la aldea, entre ellos una mujer parálitica y otra ciega, murieron calcinados en los incendios. Las fotos analizadas por el ACNUDH mostraban cadáveres carbonizados de personas a las puertas de sus casas.

44. Estos ataques se combinan a menudo con incursiones en las aldeas y bombardeos de artillería que causan más daño físico a los civiles, al tiempo que perpetúan un clima de miedo constante. El 21 de marzo, varias fuentes independientes confirmaron que los militares habían llegado en lanchas a los pueblos costeros de Auk Kyauk Wut y Nyaw Pyin, en el municipio de Launglon, región de Tanintharyi. Saquearon viviendas, se llevaron objetos de valor y quemaron al menos 90 casas en ambos pueblos. Más tarde, ese mismo día, los militares bombardearon los pueblos cinco veces desde el mar. Los habitantes fueron testigos de una escalada de la violencia en un breve período de tiempo, y se informó de operaciones terrestres y asesinatos el 4 de marzo e incendios y ataques de artillería el 21 de marzo. Esto ha provocado desplazamientos masivos y la imposibilidad de regresar por miedo a nuevos ataques militares.

¹⁴ Véase <https://ispmyanmar.com/community/wp-content/uploads/2023/08/DM-48-7x10-eng.pdf>.

45. Entre el 23 de marzo y el 11 de abril de 2023, en el municipio de Shwegu, estado de Kachín, las imágenes de satélite confirman que 1.424 casas de 14 aldeas resultaron dañadas o destruidas. Según los testimonios, el 23 de marzo, más de 100 soldados de los Batallones de Infantería Ligera 10º y 77º llegaron al este de Shwegu y se enfrentaron a las fuerzas combinadas del Ejército Independiente de Kachín y las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Shwegu en las aldeas de Nawng Let Gyi y Man Wein. El análisis de las imágenes por satélite confirma que casi 300 estructuras resultaron dañadas y quemadas como consecuencia del ataque militar. En los días siguientes, las hostilidades se extendieron a las poblaciones cercanas y los soldados llegaron a las aldeas de Man Wein, Si Thar, Si Thaug, Si Mu Lay y Si Mu Gyi para incendiar casas. En total, 350 de las 557 construcciones de las aldeas de Si Thaug y Nam Lang fueron destruidas o quemadas por los militares. Más de la mitad de las casas de las aldeas de Man Wein, Si Mu Lay y Si Mu Gyi fueron destruidas; las reservas de alimentos y el ganado no se libraron de la destrucción. Un entrevistado de la aldea de Si Thaug relató: “Pude ver mi casa ardiendo desde lejos. Empezaron a quemar el pueblo desde mi casa. Había guardado madera para construir una casa nueva; también la quemaron”.

46. También se recibió regularmente información sobre quemas de los estados de Kayin, Kachín, Chin y Kayah. Sin embargo, los desplazamientos forzados, los cortes de Internet y la falta de disponibilidad de imágenes por satélite han dificultado una verificación independiente completa.

III. Vulneraciones y abusos por grupos y elementos armados contrarios al ejército

47. Durante el período que abarca el informe, el ACNUDH siguió documentando y registrando vulneraciones y abusos cometidos por grupos y elementos armados antimilitares contra civiles. Su verificación se ve afectada por la situación general de seguridad, la discutida credibilidad de los informes militares y otros informes públicos y las dificultades para identificar a los autores, aunque su escala e intensidad no pueden compararse con las vulneraciones cometidas por los militares. Grupos y elementos armados antimilitares, afiliados o no al Gobierno de Unidad Nacional, perpetraron sistemáticamente asesinatos selectivos y ataques contra tribunales, oficinas de inmigración, departamentos fiscales y otros edificios públicos con drones, bombas y granadas. Las víctimas suelen ser administradores locales, funcionarios, miembros de partidos políticos vinculados al ejército o individuos acusados de ser informadores militares. Ocasionalmente, algunos grupos han reivindicado la autoría de los incidentes a través de las redes sociales¹⁵. Según información del ejército que no ha podido ser verificada de forma independiente, los ataques de grupos y elementos armados contrarios al ejército han causado la muerte de más de 6.000 civiles inocentes, entre ellos 75 monjes y monjas, 825 administradores, 57 antiguos militares, 4.738 ciudadanos civiles y miembros de partidos políticos, 80 profesores, 17 miembros del personal sanitario, 202 niños y 154 funcionarios al 30 de junio de 2023.

48. En respuesta a una solicitud del ACNUDH, el Gobierno de Unidad Nacional informó de que había adoptado medidas y establecido mecanismos para garantizar que los grupos armados antimilitares afiliados cumplieran las disposiciones pertinentes del derecho internacional de conformidad con su código de conducta. Las medidas incluían la publicación de directivas y reglamentos sobre la protección de los niños y los civiles y sobre el trato a los prisioneros, la formación para el desarrollo de la capacidad, una revisión de las normas de combate y el establecimiento de mecanismos de supervisión e investigación, incluido el Comité Central Interministerial de Denuncias e Informes y una Comisión Central de Investigación de Crímenes de Guerra. Hasta la fecha, la Comisión habría recibido 185 denuncias, incluidos actos cometidos por grupos armados antimilitares, que fueron tramitadas por su tribunal militar. No se facilitó información sobre los resultados de esos casos, incluida la rendición de cuentas de los autores.

¹⁵ El ACNUDH evaluó al menos 70 reivindicaciones de responsabilidad formuladas en línea. Sin embargo, es posible que esa cifra sea mayor.

49. Los asesinatos selectivos de administradores locales y personas percibidas como colaboradores militares son una táctica clave de los grupos y elementos armados contrarios al ejército. Estos incidentes son motivo de grave preocupación, ya que pueden constituir muertes ilícitas y con frecuencia conllevan el fallecimiento de otras personas presentes en el lugar. En los casos que se describen a continuación, si estaban vinculados a un conflicto armado, las personas contra las que iban dirigidos no habían perdido su protección como civiles frente a los ataques, ya que sus actividades no parecían constituir una participación directa en las hostilidades. Por lo tanto, estos asesinatos selectivos pueden constituir una violación de la prohibición de dirigir ataques contra la población civil. Entre los casos en los que se produjo un reconocimiento de la autoría, el ACNUDH constató que, el 17 de octubre de 2022, miembros de la Fuerza de la Revolución del municipio de Wundwin, en Mandalay, abrieron fuego contra un administrador del municipio que estaba almorzando en un restaurante. El administrador y otro individuo murieron en el acto, mientras que una tercera persona resultó herida. Del mismo modo, el 24 de marzo de 2023, una administradora de barrio fue asesinada a tiros en su casa del municipio de Pyigyidagon, en la región de Mandalay. Al reivindicar su autoría, la Guerrilla Urbana-MDY y el grupo guerrillero urbano Ranger la acusaron de obligar a los residentes a informar sobre las listas de invitados y de extorsionarles. Asimismo, el 12 de enero de 2023, en el municipio de Natmawk, la región de Magway, varios miembros de los grupos guerrilleros de Magway y de los Peacock Warriors mataron a tiros al director de una escuela primaria, alegando en un comunicado de prensa que presionaba al personal educativo del municipio para que cooperara con los militares.

50. El ACNUDH también siguió registrando denuncias de ataques de grupos armados antimilitares contra oficinas públicas con bombas y granadas y descubrió que se habían llevado a cabo varios ataques a pesar del riesgo inherente de causar muertes entre la población civil. Por ejemplo, el 5 de junio de 2023, el grupo guerrillero urbano Brave Eagles detonó una bomba en una oficina de Hacienda de Rangún, hiriendo a cuatro empleados y a otras dos personas. Aunque reivindicó la autoría de las víctimas y pidió disculpas por la implicación de personas que no trabajaban en la oficina, el grupo declaró que el atentado pretendía ser una advertencia a los funcionarios que no participaban en el movimiento de desobediencia civil.

51. A mediados de abril, varias fuentes fidedignas informaron también de ataques con bombas y drones contra los tradicionales pabellones de agua que se habían instalado en varias ciudades para celebrar el *Thingyan* o Año Nuevo de Myanmar. Antes de los ataques, varios grupos instaron a la población a no acercarse a estos pabellones, ya que podían ser un objetivo. En un incidente grabado en vídeo en Loikaw, estado de Kayah, una bomba probablemente lanzada desde un dron explotó junto al escenario donde actuaban bailarines tradicionales. Según los informes, al menos 28 personas, entre ellas muchos funcionarios, resultaron heridas. Las Fuerzas de Defensa Popular de Loikaw y el grupo armado Falcon Wings reivindicaron la autoría del atentado, afirmando que se había llevado a cabo en venganza por las matanzas perpetradas por los militares en el pueblo de Pa Zi Gyi y en otros lugares. Se informó de ataques similares en diferentes partes de Myanmar durante las celebraciones del *Thingyan*. El 13 de abril, en el pueblo de Kywei Pon, región de Sagaing, los medios de comunicación informaron de que una bomba había estallado en el aparcamiento de un pabellón, causando al menos cuatro muertos. El mismo día, en Lashio, estado de Shan, un ataque con dron tuvo como objetivo el lugar de la celebración, matando al parecer a ocho personas. Hasta la fecha no ha sido posible llevar a cabo ninguna verificación independiente.

52. Además, el ACNUDH analizó vídeos publicados en las redes sociales en los que aparecían personas mientras eran torturadas y, en un caso, ejecutadas por presuntos miembros de grupos armados antimilitares. El 3 de diciembre de 2022, un vídeo difundido en las redes sociales mostraba a presuntos miembros de un grupo armado golpeando repetidamente en la cabeza a una mujer esposada, dándole patadas, tirándole del pelo y golpeándola con la culata de un fusil hasta que confesó ser una informante del ejército. Posteriormente la mataron a tiros en la calle¹⁶. En otro vídeo en línea que salió a la luz en mayo de 2023, tres hombres con

¹⁶ La información divulgada por los medios de comunicación indicaba que el incidente ocurrió en el municipio de Tamu, región de Sagaing, en junio de 2022.

uniformes del grupo del Partido del Progreso del Estado de Shan interrogaban a un hombre colgado de un árbol mientras intentaba desesperadamente evitar ser quemado por una hoguera justo bajo sus pies. No se encontró más información sobre su suerte ni sobre las acciones emprendidas para que los autores rindieran cuentas.

IV. Situación de los derechos humanos de los rohinyás

53. Aunque la situación en el estado de Rakáin se mantuvo mayoritariamente estable desde el punto de vista de la seguridad, la situación de los derechos humanos de la comunidad rohinyá sigue siendo motivo de gran preocupación. Cuando el ciclón Mocha tocó tierra en Myanmar el 14 de mayo de 2023, causó una destrucción generalizada y afectó a todas las comunidades del estado de Rakáin. Agravó los problemas de protección de la comunidad rohinyá, ya empañados por décadas de discriminación extrema y otras graves violaciones de los derechos humanos, muchas de las cuales pueden constituir crímenes según el derecho internacional. De los 600.000 rohinyás que se calcula que permanecen en el norte del estado de Rakáin, más de 150.000 han sido desplazados a campos del centro de Rakáin, donde sus derechos y libertades están gravemente restringidos. En estas circunstancias, los miembros de la comunidad rohinyá tuvieron que soportar tanto el peso de la tormenta como las consecuencias de las acciones militares dirigidas a impedir el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas. Los entrevistados informaron de grandes daños estructurales, que afectaron a casi todas las casas de los municipios de Sittwe y Rathedaung. Debido a que los campos de desplazados de Sittwe estaban situados cerca del mar o en zonas bajas propensas a las inundaciones, muchos desplazados rohinyás lo perdieron todo. Sus endebles viviendas provisionales no tenían ninguna posibilidad contra los vientos ciclónicos, mientras que los miembros de la comunidad denunciaron no haber recibido información adecuada ni autorización para ponerse a salvo. Algunas comunidades que recibieron alertas no las tuvieron en cuenta debido a su falta de confianza en los militares y al miedo a más expropiaciones, destrucción y pérdida de propiedades. Un entrevistado informó de que los militares habían designado una escuela local como único lugar de evacuación para los aproximadamente 6.800 residentes de un campamento en Sittwe y que la escuela solo podía alojar a unas pocas familias. En respuesta al ACNUDH, los militares declararon que habían llevado a cabo una evacuación preventiva de unas 63.300 personas de un total aproximado de 125.700 desplazados internos de 17 campamentos a edificios más seguros y refugios anticiclónicos.

54. Aunque los informes iniciales estimaron en más de 400 el número de rohinyás muertos, los militares afirmaron unilateralmente que habían muerto 116. También amenazaron con emprender acciones legales contra las personas y los medios de comunicación que ofrecieran cifras diferentes e impidieron, en la práctica, cualquier otra labor de documentación. En su presentación, los militares indicaron que un total de 148 personas habían perdido la vida, sin proporcionar información específica sobre los rohinyás. Al cotejar las cifras militares, resulta evidente que los rohinyás se han visto afectados de forma desproporcionada en comparación con otras comunidades, probablemente debido a las numerosas vulnerabilidades a las que se enfrentan y a la falta de acciones preventivas más decisivas. Uno de los entrevistados atribuyó el mayor número de muertes entre los rohinyás a las limitadas opciones de evacuación disponibles y a la imposibilidad de que se desplazaran libremente para buscar refugio. Al parecer, la mayoría de las muertes se produjeron mientras los miembros de la comunidad, especialmente mujeres y niños, intentaban huir de la crecida de las aguas. Una mujer rohinyá cuya familia se había apuntado a la evacuación relató que un día antes del ciclón le informaron de que todos los refugios estaban llenos. Su hijo pequeño fue arrastrado por las olas cuando la familia intentaba escapar de las inundaciones.

55. Tras el ciclón, los militares instrumentalizaron las operaciones de socorro. Cuatro semanas después de que el ciclón tocara tierra, el ejército suspendió todas las autorizaciones de viaje para todas las operaciones de socorro y emitió instrucciones de que todas las respuestas y suministros de socorro en caso de catástrofe debían ser gestionados directamente por el ejército. También obstruyó los esfuerzos de socorro de los grupos locales de la sociedad civil mediante amenazas y detenciones de quienes entregaban ayuda o recaudaban fondos

para las labores de socorro. Las restricciones al acceso de la ayuda humanitaria afectaron a todas las comunidades del estado de Rakáin, tanto en zonas urbanas como rurales, incluidas las que estaban bajo el control del Ejército de Arakán. Los entrevistados de campamentos y aldeas declararon no haber recibido ninguna o muy poca ayuda del ejército y vivir en refugios improvisados con un acceso extremadamente limitado a alimentos, agua potable y atención médica. Un entrevistado declaró que no podía proporcionar comida a sus hijos todos los días, mientras que otro dijo que muchas mujeres viudas se veían obligadas a mendigar alimentos, lo que agravaba sus riesgos de exposición a la explotación y los abusos. Para refugiarse de la estación de los monzones, los desplazados rohinyás buscaron entre los escombros para encontrar materiales básicos con los que reconstruir sus viviendas. Los repetidos llamamientos de altos funcionarios de las Naciones Unidas para que se facilite el acceso a fin de hacer frente a los riesgos de inseguridad alimentaria y de enfermedades transmitidas por el agua han sido ignorados y los rohinyás siguen expuestos a graves condiciones que ponen en peligro su vida.

56. A pesar de ello, y en clara ausencia de condiciones para un retorno seguro, digno y sostenible, desde marzo de 2023, los militares han pretendido organizar el retorno de aproximadamente 1.000 refugiados rohinyás desde Bangladesh. Tras visitar el Bazar de Cox, en Bangladesh, en marzo, para identificar a posibles retornados, en mayo los militares apoyaron una visita de “comprobación” de refugiados rohinyás a centros de reubicación en el estado de Rakáin. Después de realizar la visita, los participantes se negaron a regresar, insistiendo en que no se daban las condiciones básicas y que su retorno solo se produciría una vez que hubiera garantías de seguridad, restablecimiento de los derechos de ciudadanía, disfrute de las libertades fundamentales y acceso a los medios de subsistencia y a los servicios esenciales. Sin embargo, los militares ofrecieron un plan en el que los retornados serían enviados inicialmente a centros de “recepción” y “tránsito” en el municipio de Maungdaw, construidos en su mayoría en tierras en las que los rohinyás habían vivido antes de 2017, para ser posteriormente trasladados a zonas en las que tendrían que participar en un programa de efectivo por trabajo para construir sus casas. Este plan no menciona ninguna compensación o reparación por la victimización y otras violaciones sufridas por los miembros de la comunidad rohinyá. Además, los rohinyás se verían obligados a aceptar la portación de tarjetas nacionales de verificación, que han rechazado por considerarla una herramienta de un sistema discriminatorio que afianza su condición de inmigrantes extranjeros y les niega plenos derechos de ciudadanía. Dado que a los rohinyás no se les ha permitido desplazarse libremente para buscar ayuda, ni siquiera tras el ciclón, es razonable esperar que a los retornados también se les niegue el derecho a la libertad de circulación y el derecho a acceder a servicios como la sanidad, la educación y los medios de subsistencia, lo que les obligaría de nuevo a seguir patrones de exclusión y privación de libertad, similares a la situación de los rohinyás que viven en campamentos en Sittwe desde 2012.

V. Conclusiones y recomendaciones

57. En los casi tres años transcurridos desde que los militares intentaron derrocar al Gobierno legítimamente elegido, y tras la detención de muchos miembros del Gobierno, la situación general de los derechos humanos en Myanmar sigue deteriorándose, exponiendo a la población a graves violaciones de los derechos humanos y a graves infracciones del derecho internacional humanitario. Como se expone en el presente informe, el Alto Comisionado constata que el ejército, mediante ataques aéreos y operaciones terrestres, actuando con total impunidad y en continuo desprecio por la vida humana, es responsable de una nueva escalada sustancial de la violencia. El ACNUDH ha documentado un fuerte aumento de diversas violaciones graves de los derechos humanos, incluido un incremento del número de incidentes en los que murieron diez o más personas. Esto sugiere que las peticiones del Consejo de Seguridad, del Consejo de Derechos Humanos y de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental, entre otros, para el cese de la violencia, la contención, la protección de los civiles y el acceso humanitario han sido desoídas por la cúpula militar. Las vulneraciones y los incidentes documentados en el informe son coherentes con los patrones de conclusiones anteriores y los confirman, detallando el catastrófico impacto en los derechos humanos que las acciones militares han tenido en la población civil y la creciente brutalidad con

la que los militares las han llevado a cabo. Los continuos ataques contra escuelas, edificios religiosos y reuniones comunitarias con gran presencia de civiles, la realización de decapitaciones y el desmembramiento de cadáveres, la comisión de violaciones, la quema de pueblos y personas, el asesinato de niños pequeños junto a sus madres y el uso de armas con capacidad para aumentar al máximo el número de víctimas son indicativos de hasta dónde parecen estar dispuestos a llegar los militares en su campaña para acabar con toda oposición, sin que haya indicios de que se haya iniciado ningún proceso de rendición de cuentas por las vulneraciones descritas.

58. Los entrevistados y los interlocutores afirmaron sistemáticamente que la población de Myanmar vive en un persistente estado de miedo. La gente teme que los ataques aéreos y las operaciones terrestres puedan sobrevenir en cualquier momento y contra cualquiera. Aldeas sin antecedentes de combates o de presencia de grupos armados han sido atacadas e incendiadas, lo que ha causado muertes, desplazamientos y destrucción. Continuamente se producen detenciones y privaciones de los derechos humanos más básicos en una situación en la que hay una ausencia total del estado de derecho. Según los informes, los incendios han destruido más de 70.000 construcciones, han matado a cientos de personas, entre ellas ancianos y personas con discapacidad, y han devastado almacenes de alimentos y bancos de semillas, causando daños inmediatos y a largo plazo al disfrute de los derechos humanos, en particular el derecho a la alimentación. Impedir y politizar el acceso de la ayuda humanitaria a las zonas afectadas tanto por la violencia como por los efectos del reciente ciclón Mocha es inconcebible, especialmente cuando la población necesita urgentemente refugio, alimentos y agua para salvar sus vidas.

59. En estas desastrosas condiciones, la población de Myanmar también se ve afectada por la violencia ejercida por los grupos armados antimilitares, incluidos los asesinatos selectivos y el bombardeo de lugares públicos, así como por las catástrofes naturales. El ciclón Mocha contribuyó a la devastación general, afectando de forma desproporcionada a los miembros de la comunidad rohinyá. En lugar de facilitar las acciones humanitarias, los militares suspendieron las autorizaciones de viaje para las operaciones de socorro e instrumentalizaron la ayuda vital.

60. Sin que se vislumbre el final de la violencia y las violaciones contra la población civil, es más urgente que nunca adoptar medidas decisivas y concretas a nivel internacional y regional. Dado que es poco probable que los propios militares cambien radicalmente su abuso de poder y violencia en un futuro previsible, la responsabilidad de proteger a los civiles y restablecer unas condiciones de vida propicias para la paz y la estabilidad sigue recayendo en la comunidad internacional en general.

61. A la luz de las conclusiones expuestas y recordando recomendaciones previas, el Alto Comisionado recomienda que los militares:

- a) Apliquen inmediatamente la resolución 2669 (2022) del Consejo de Seguridad, cesen toda violencia y concedan acceso humanitario sin trabas en todo el país;
- b) Permitan el acceso humanitario pleno, sin restricciones y previsible a todos los necesitados por parte de las organizaciones internacionales y nacionales para que puedan proporcionar ayuda vital a la población;
- c) Apoyen procesos políticos inclusivos y transparentes para devolver a Myanmar a la senda del desarrollo democrático;
- d) Adopten todas las medidas necesarias para garantizar que los miembros de la comunidad rohinyá no sigan siendo victimizados, incluso obligando a los refugiados a regresar mientras siguen siendo apátridas de hecho, y garanticen el cumplimiento pleno y continuado de las medidas provisionales ordenadas por la Corte Internacional de Justicia;
- e) Proporcionen al ACNUDH un verdadero acceso a Myanmar para facilitar la supervisión y la presentación de informes independientes e imparciales sobre la situación de los derechos humanos, en particular sobre la protección de los civiles.

62. El Alto Comisionado recomienda que todas las partes en Myanmar:

a) Respeten y hagan respetar el derecho internacional de los derechos humanos y, cuando proceda, cumplir plenamente el derecho internacional humanitario, en particular las normas relativas a la protección de los civiles y de las personas fuera de combate;

b) Permitan y faciliten el acceso humanitario oportuno y sin trabas a todos los necesitados por parte de las organizaciones internacionales y nacionales para proporcionar ayuda vital;

c) Cooperen con los mecanismos internacionales pertinentes de derechos humanos y rendición de cuentas para apoyar los procesos de recogida de pruebas sobre los crímenes cometidos en Myanmar contra la población civil.

63. El Alto Comisionado recomienda que los garantes de derechos, incluido el Gobierno de Unidad Nacional, garanticen que las denuncias de abusos de los derechos humanos contra la población civil cometidos por miembros de grupos armados bajo su control directo se investiguen con prontitud y transparencia y que los autores respondan de esos actos.

64. El Alto Comisionado reitera su recomendación anterior de que el Consejo de Seguridad remita toda la situación actual en Myanmar a la Corte Penal Internacional y recomienda también que los Estados Miembros, en particular los que tienen influencia sobre las partes:

a) Sigam prestando rigurosamente atención a los acontecimientos en Myanmar a medida que la situación sigue deteriorándose y apoyen los esfuerzos de documentación y rendición de cuentas;

b) Garanticen que no se proporcionen o posibiliten suministros directos o indirectos de armas, municiones, vehículos y equipos militares, bienes de doble uso o combustible de aviación militar dando acceso a divisas a los militares para tales fines;

c) Colaboren con el sector privado para evitar proporcionar ingresos al ejército que previsiblemente puedan utilizarse para facilitar o cometer violaciones del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y de los crímenes de derecho internacional;

d) Adopten medidas concretas para garantizar que los rohinyás de Myanmar, Bangladesh y otros lugares tengan acceso a alimentos, medicinas y refugio suficientes, así como a procesos de reasentamiento voluntario, al tiempo que se concede asilo a los rohinyás víctimas de violaciones de los derechos humanos.
